

OPINIÓN

¿Qué más puede salir mal?



Por CIRILO ARANDIS (*)

Si hace quince días hablábamos de que la situación internacional estaba patas arriba, motivado por las consecuencias derivadas de la invasión rusa de Ucrania, en estos momentos, lo que está patas arriba es la situación de nuestro país. Aquellos polvos han traído estos lodos, y si bien los distintos países de nuestro entorno han ido adoptando medidas, con mayor o menor éxito, pero medidas, al fin y al cabo, lo que ha ocurrido en España es que la actual situación no ha hecho más que dejar al descubierto una serie de carencias estructurales que venimos arrastrando desde hace ya tiempo.

Si hacemos un poco de historia, allá por el mes de septiembre del año pasado, la previsión de cosecha de cítricos anunciada de modo oficial nos daba pie al optimismo. Tocaba cosecha corta, según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que estimaba la cosecha cítrica de la actual campaña en un total de 6,7 millones de toneladas, un 4,8% menor respecto de la campaña precedente, y un 2,1% inferior a la media de los cinco últimos años. Los datos del balance de la campaña anterior también eran buenos, con un mercado dinámico, fruto de la apetencia de cítricos durante el periodo de pandemia.

Pero como la alegría dura poco en la casa del pobre, las buenas noticias acabaron pronto. Si bien la campaña de clementina se pudo calificar de aceptable, básicamente porque la producción final fue incluso inferior a la esperada, la campaña de naranjas se puede calificar de desastrosa para el productor. Decir que solo un hecho condiciona estos resultados es hacer un ejercicio de simplificación, pero lo que sí que es cierto es que ese buen mercado existente al inicio de campaña sirvió como efecto llamada, alimentando los envíos de fruta procedentes del hemisferio sur. Todos los países que remiten cítricos a Europa, y en particular Sudáfrica, se movieron durante los meses de septiembre y octubre de 2021 en niveles de máximos históricos de exportación al viejo continente.

Pese a todo, el mensaje político de finales del año pasado era el de la recuperación económica. Más o menos asumidos los efectos de la pandemia, y con un alto nivel de vacunación en la población española, los renovados ánimos de superación nos hacían concebir esperanzas en relación con los tan anunciados Fondos de Recuperación y Resiliencia. Dentro del paquete económico conocido como Next Generation, promovido por Bruselas, España es uno de los principales perceptores. Fondos dirigidos a la digitalización del campo, nos decían, y que nos permitirían no perder el carro de la competitividad como garantía futura de éxito en el mercado.



La campaña de naranjas se puede calificar de desastrosa para el productor. / ARCHIVO

Con el devenir del tiempo, hemos visto como se han anunciado, al menos tres PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), financiados con los Fondos Next Generation, que puedan tener una relación más o menos directa con el productor. Así, ya se ha anunciado el PERTE agrario, el agroalimentario y el de digitalización del ciclo del agua. No me cabe duda de que el dinero va a estar bien aprovechado para los fines previstos, pero también es cierto que el productor agrícola no va a ser el principal protagonista como agente receptor de estos fondos. Así, volvemos a plantearnos el ciclo vicioso que supone no invertir al no haber renta, y no obtener renta, por lo que no se invierte.

En atención al devenir de la campaña, se debería de haber puesto a prueba la denominada como Ley de la Cadena. Tan solo hay que abrir las páginas web de las lonjas de precios y ver que precio y costes no iban unidos de la mano. No obstante, en su descargo, hay que decir que todavía estamos en periodo de rodaje y que quedan todavía cuestiones que perfilar. Se espera que, en breve, funciones que tiene encomendadas la Agencia de Información y Control Alimentario, (AICA), en la medida que se van constituyendo las oficinas autonómicas, irán adquiriendo un mayor protagonismo. Insisto en que esta Ley está hecha con las mejores intenciones, pero que, a su vez, supone también toda una serie de dificultades en su aplicación. El tiempo dirá.

Entre tanto, el campo ha salido a la calle, y se ha ido manifestando en las distintas comunidades autónomas, con la mirada vista en la manifestación, ya prevista desde hace

“La huelga de los transportistas ha cerrado el círculo de todo aquello que nos puede ir mal. Y lo cierto es que el suministro de alimentos, que funcionó a la perfección durante la pandemia, se está resintiendo, al igual que otras actividades económicas”

“Todos conocemos la famosa Ley de Murphy. De modo sintético, viene a decir que, si algo puede salir mal, saldrá mal, y eso es lo que nos está ocurriendo, este año de modo más evidente que nunca, a los productores. No sé qué más nos puede pasar que nos haga recordar aquella frase del más optimista que decía que la situación es crítica, pero susceptible de empeorar. Esperemos que esto no sea así, porque todo tiene un límite”

tiempo, en Madrid, a la que se sumaron otros colectivos que generan su actividad en el ámbito rural, y que tuvo lugar el pasado 20 de marzo. El germen de las protestas era que no salían las cuentas y la consiguiente ausencia de renta en la labor agrícola. Tema estructural, sin duda, pues el equilibrio en la cadena alimentaria a la hora de la negociación no existe, y además, las políticas en favor de la integración de los agricultores en Organizaciones de Productores bien dimensionadas se vienen haciendo con la boca pequeña. En este contexto es fácil que el precio se imponga en destino y se vaya descontando en la cadena hasta que al agricultor le llega lo que quede, si es que queda algo.

Siguiendo en el tiempo, sea causa de la invasión rusa de Ucrania o no, lo cierto es que los costes se han disparado. Abonos, productos fitosanitarios, combustible, electricidad, seguros agrarios, se han

enredado en una escala de incrementos de precios desconocida desde hace tiempo. Lo normal, en cualquier cadena de suministros que funcione adecuadamente, es que los incrementos de costes en los distintos procesos se traduzcan en un incremento, en mayor o menor medida, del precio final. Pero ya sabemos que esto en el sector agroalimentario es imposible. Las cadenas de distribución ya tienen su programación elaborada desde hace tiempo, sabiendo que ya están irrumpiendo en el mercado las ofertas procedentes de Egipto a unos precios inasumibles por el nivel de costes en Europa.

Ni la Ley de la Cadena, ni la PAC tienen solución para este escenario. El cierre de los mercados en conflicto bélico, como es el caso de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, supone el desvío de esa fruta, en buena medida al mercado europeo. Ahora más que nunca, cuando la Unión Europea se muestra inflexible en

la aplicación del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, es cuando más necesario es la aplicación del concepto de reciprocidad, en relación con la producción y comercialización de fruta procedente de países terceros. Lo que nos dice todo esto es que el agricultor se encuentra en medio de la acción del lobby ambientalista y de la gran distribución, por lo que la solución a los problemas del campo debería de venir de la mano, también, de estos colectivos. Lo contrario será, poco a poco, depender de fuera de un tema básico como es la alimentación, además de un paso atrás en la gestión del territorio y del medio ambiente.

Finalmente, la huelga de los transportistas ha cerrado el círculo de todo aquello que nos puede ir mal. Un error estratégico de la mesa negociadora promovido desde el Ministerio Transporte, Movilidad y Agenda Urbana hizo que, además de aquellos colectivos con una aparente menor representación ante la Administración, se tuviera que sumar al paro la gran patronal del transporte. Si bien estos últimos han desconvocado el paro al sentirse satisfechos por la oferta de la ministra Raquel Sánchez, la denominada “Plataforma”, sigue en pie de guerra mientras no tenga una Ley, que al igual que ocurre en el sector agrario, impida comercializar a pérdidas. Paradojas de la vida. Lo cierto es que el suministro de alimentos, que funcionó a la perfección durante la pandemia, se está resintiendo, al igual que otras actividades económicas.

Entre tanto, cada país va dando las soluciones que puede, en la mayoría de los casos con reducciones sustanciales del precio del combustible. Hasta Bruselas se ha puesto las pilas activando la Reserva de Crisis de 500 millones de euros prevista en el contexto de la PAC, de la cual, a España le ha correspondido 64,5 millones de euros. Hay que decir, no obstante, que este dinero de la Reserva de Crisis es dinero de la PAC, que se descuenta de otras partidas, y que, por tanto, no son fondos adicionales. En España, tras el resultado del Consejo Europeo anunciado por el presidente Sánchez, todo queda a lo que el Gobierno de España anuncie el día 29 de marzo. Su aplicación tardará un mes, y entonces a saber quién quedará.

Todos conocemos la famosa Ley de Murphy. De modo sintético, viene a decir que, si algo puede salir mal, saldrá mal, y eso es lo que nos está ocurriendo, este año de modo más evidente que nunca, a los productores. No sé qué más nos puede pasar que nos haga recordar aquella frase del más optimista que decía, que la situación es crítica, pero susceptible de empeorar. Esperemos que esto no sea así, porque todo tiene un límite.

(*) *Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries*